plaza pública para la edición del 30 de abril de 1993
% Gubernatura jalisciense
% Rectificación yucateca
miguel ángel granados chapa

Presentada ayer la solicitud de prórroga de licencia por el gobernador de Jalisco Guillermo Cosío Vidaurri, se allana el camino para que hoy el interino Carlos Rivera Aceves reciba una renovación de su encargo, por un año más. Era la solución mnos complicada, sobre todo a la luz de la provocación yucateca, que a pesar de una rectificación de última hora, no ha perdido por completo sus filosos riesgos.

Tienen razón los diputados jaliscienses que votaron contra la petición de Cosío Vidaurri. Ya no se trata de una licencia, pues un nuevo alejamiento, por un año más, constituye una renuncia en los hechos. Pero si se mantiene la ficción del pemiso, permanece también la figura de la ausencia temporal, que no da lugar a la convocatoria a elecciones. Como se sabe, en Jalisco una renuncia antes del quinto año significa la cancelación del periodo, es decir, que el interino que suple una falta absoluta no se queda hasta terminar el periodo, ni convoca a elecciones extraordinarias, sino a unas de carácter ordinario, que significa el comienzo de un nuevo sexenio. Dentro de un año, importará menos si Cosío Vidaurri solicita una nueva licencia o si renuncia a su cargo. De todos modos se iniciará un nuevo sexenio en abril de 1995.

Antes de ayer, estaban abiertas dos posibilidades, remotas pero posibles. Una era que Cosío Vidaurri resolviera volver a su cargo. La otra, que renunciara. En el primer caso, hubiera podido hacerlo en un acto voluntarista, sin obtener la aquiescencia del poder central, el mismo que lo hizo gobernador y lo depuso. Hace mucho tiempo que nadie se opone abiertamente a las decisiones presidenciales. En Jalisco, lo hizo el general Marcelino García Barragán cuando en 1947 se opuso a cohonestar una ilegal prórroga de cuatro a seis años en la entrante gubernatura del licenciado Jesús González Gallo. El resultado querido por el Presidente Alemán se consiguio, pero sin la colaboración del futuro henriquista y secretario de la Defensa Nacional. Pero eran otros tiempos y otras personas. Pero a solas o con apoyo federal, el estado de la opinión ciudadana hubiera convertido en una nueva provocación el regreso de Cosío Vidaurri. La conmemoración del 22 de abril dejó muy claramente establecido lo que a ese respecto piensan los damnificados de la tragedia de hace un año, y un significativo sector de la opinión participante.

La cuestión de quién ejerrza el interinato está resuelta. No habría razón, aun en la perspectiva de quienes lo critican, para no dejar en el palacio de gobierno a Rivera Aceves. Claro que se puede formular una lista de omisiones y

desaciertos, en que el maltrato a los afectados de Analco (así en lo que hace al violento desalojo del seis de mayo como a las modalidades y términos de la reconstrucción y las indemnizaciones) ocuparía un lugar relevante. Pero ni es usual que un mal desempeño se castigue con la remoción, ni nada garantizaría que lo hubiera mejor en el año que sigue. Si hubiera sido real la opción de la renuncia, la consiguiente ausencia definitiva y la convocatoria a elecciones, otro sería el escenario. Pero en las condiciones presentes, aun los más severos críticos del interinato pueden aceptarlo como un mal menor. Más todavía, Rivera Aceves puede ser condicionado políticamente a la hora de ratificarle el nombramiento, en la sesión de hoy, para que de modo puntual repare los yerros en que haya incurrido, y haga avanzar al gobierno jalisciense hacia metas que remedien las notorias insuficiencias que aquejan a la población, en materia de seguridad pública, por ejemplo.

Mientras Cosío Vidaurri hacía llegar a la legislatura local la petición de nueva licencia, la gobernadora Dulce María Sauri Riancho era obligada a hacer el ridículo. Con énfasis digno de mejor causa, había jurado que no daría marcha atrás en la refoema constitucional adoptada por su Congreso local el 23 de abril, y antes de una semana ya estaba caminando en reversa. Todas las proclamas que ella misma y sus voceros formularon sobre la dignidad de las decisiones locales, se estrellaron ante necesidades políticas de mayor alcance. Estaba en riesgo la concertación para la reforma electora, por la justificada belicosidad panista, y no era cuerdo mantener la insensata reforma en sus términos originales.

Es seguro que Acción Nacional admita la modalidad propuesta por la gobernadora Sauri. De tal modo, el 28 de noviembre habrá elecciones para integrar los poderes legislativo y ejecutivo, y renovar ayuntamientos, pero todos sus titulares serán interinos, pues desempeñarán año y medio sus funciones, en vez de seis años el gobernadora (o gobernadora, claro) y tres años los otros elegidos. La innovadora figura de un interino elegido es un adefesio, resultante de una mala transacción, que sin embargo es mejor que un peor pleito.

De este lance, el PRI sale semiderrotado, y el PAN semivictorioso. En rigor jurídico, la fórmula que mejor hubiera avenido la vigencia de la regularidad institucional con la satisfacción de una necesidad sentida por los yucatecos (que entraña una mecánica admisión del imperio de lo central sobre lo regional) hubiera consistido en programar el acompasamiento de los tiempos local y federal para el final del próximo sexenio. Con el obvio desconocimiento de lo que ocurrirá entonces, la reforma operaría sin parecer una

prenda fabricada a la medida, como era la que ahora
modificarán, con la misma caradura con que aprobaron la de
hace una semana, los diputados priístas (con una honrosa
excepción) y sus comparsas.

PLAZA PUBLICA

■ Gubernatura jalisciense

■ Rectificación yucateca

Miguel Angel Granados Chapa

Presentada ayer la solicitud de prórroga de licencia por el gobernador de Jalisco Guillermo Cosío Vidaurri, se allana el camino para que hoy el interino Carlos Rivera Aceves reciba una renovación de su encargo, por un año más. Era la solución menos complicada, sobre todo a la luz de la provocación yucateca, que a pesar de una rectificación de última hora, no ha perdido por completo sus filosos riesgos.

Tienen razón los diputados jaliscienses que votaron contra la petición de Cosío Vidaurri. Ya no se trata de una licencia, pues un nuevo alejamiento, por un año más, constituye una renuncia en los hechos. Pero si se mantiene la ficción del permiso, permanece también la figura de la ausencia temporal, que no da lugar a la convocatoria a elecciones. Como se sabe, en Jalisco una renuncia antes del quinto año significa la cancelación del periodo, es decir, que el interino que suple una falta absoluta no se queda hasta terminar el periodo, ni convoca a elecciones extraordinarias, sino a unas de carácter ordinario, que significa el comienzo de un nuevo sexenio. Dentro de un año, importará menos si Cosío Vidaurri solicita una nueva licencia o si renuncia a su cargo. De todos modos se iniciará un nuevo sexenio en abril de 1995.

Antes de ayer, estaban abiertas dos posibilidades, remotas pero posibles. Una era que Cosío Vidaurri resolviera volver a su cargo. La otra, que renunciara. En el primer caso, hubiera podido hacerlo en un acto voluntarista, sin obtener la aquiescencia del poder central, el mismo que lo hizo gobernador y lo depuso. Hace mucho tiempo que nadie se opone abiertamente a las decisiones presidenciales. En Jalisco, lo hizo el general Marcelino García Barragán cuando en 1947 se opuso a cohonestar una ilegal prórroga de cuatro a seis años en la entrante gubernatura del licenciado Jesús González Gallo. El resultado querido por el presidente Alemán se consiguió, pero sin la colaboración del futuro henriquista y secretario de la Defensa Nacional. Pero eran otros tiempos y otras personas. Pero a solas o con apoyo federal, el estado de la opinión ciudadana hubiera convertido en una nueva provocación el regreso de Cosío Vidaurri. La conmemoración del 22 de abril dejó muy claramente establecido lo que a ese respecto piensan los damnificados de la tragedia de hace un año, y un significativo sector de la opinión participante.

La cuestión de quién ejerza el interinato está resuelta. No habría razón, aun en la perspectiva de quienes lo critican, para no dejar en el palacio de gobierno a Rivera Aceves. Claro que se puede formular una lista de omisiones y desaciertos, en que el maltrato a los afectados de Analco (así en lo que hace al violento desalojo del 6 de mayo como a las modalidades y términos de la reconstrucción y las indemnizaciones) ocuparía un lugar

relevante. Pero ni es usual que un mal desempeño se castigue con la remoción, ni nada garantizaría que lo hubiera mejor en el año que sigue.

Si hubiera sido real la opción de la renuncia, la consiguiente ausencia definitiva y la convocatoria a elecciones, otro sería el escenario. Pero en las condiciones presentes, aun los más severos críticos del interinato pueden aceptarlo como un mal menor. Más todavía, Rivera Aceves puede ser condicionado políticamente a la hora de ratificarle el nombramiento, en la sesión de hoy, para que de modo puntual repare los yerros en que haya incurrido, y haga avanzar al gobierno jalisciense hacia metas que remedien las notorias insuficiencias que aquejan a la población, en materia de seguridad pública, por ejemplo.

Mientras Cosío Vidaurri hacía llegar a la legislatura local la petición de nueva licencia, la gobernadora Dulce María Sauri Riancho era obligada a hacer el ridículo. Con énfasis digno de mejor causa, había jurado que no daría marcha atrás en la reforma constitucional adoptada por su Congreso local el 23 de abril, y antes de una semana ya estaba caminado en reversa. Todas las proclamas que ella misma y sus voceros formularon sobre la dignidad de las decisiones locales, se estrellaron ante necesidades políticas de mayor alcance. Estaba en riesgo la concertación para la reforma electoral, por la justificada belicosidad panista, y no era cuerdo mantener la insensata reforma en sus términos originales.

Es seguro que Acción Nacional admita la modalidad propuesta por la gobernadora Sauri. De tal modo, el 28 de noviembre habrá elecciones para integrar los poderes Legislativos y Ejecutivo, y renovar ayuntamientos, pero todos sus titulares serán interinos, pues desempeñarán año y medio sus funciones, en vez de seis años el gobernador (o gobernadora, claro) y tres los otros elegidos. La innovadora figura de un interino elegido es un adefesio, resultante de una mala transacción, que sin embargo es mejor que un peor pleito.

De este lance, el PRI sale semiderrotado, y el PAN semivictorioso. En rigor jurídico, la fórmula que mejor hubiera avenido la vigencia de la regularidad institucional con la satisfacción de una necesidad sentida por los yucatecos (que entraña una mecánica admisión del imperio de lo central sobre lo regional) hubiera consistido en programar el acompañamiento de los tiempos local y federal para el final del próximo sexenio. Con el obvio desconocimiento de lo que ocurrirá entonces, la reforma operaría sin parecer una prenda fabricada a la medida, como era la que ahora modificarán, con la misma caradura con que aprobaron la de hace una semana, los diputados priistas (con una honrosa excepción) y sus comparsas.